

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN procede a resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **LUIS GERMÁN VÉLEZ URIBE** contra el señor **MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO** en calidad de persona natural y contra la sociedad **REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C** tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-002-2021-00428-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

El actor pretende con la demanda, que se declare la existencia de un contrato verbal de trabajo a término indefinido con la sociedad REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C, entre el 01 de noviembre de 1987 y el 30 de mayo de 2020. También pretende que se declare que la terminación de la relación laboral, se dio de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador, gozando para ese momento de fuero de estabilidad laboral reforzada.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, pretende que se condene a la compañía accionada y de manera solidaria al señor MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO en calidad de persona natural, al pago de la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la indemnización por despido sin justa causa, el pago de las acreencias laborales comprendidas entre el 01 de noviembre de 1987 y el 30 de mayo de 2020 tales como auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, así como la sanción moratoria establecida en el

artículo 65 del CST, por el no pago de prestaciones sociales, la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 por no consignación de las cesantías, las cotizaciones o aportes al sistema de seguridad social en pensiones, la indexación y las costas procesales.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, relata el actor que dispuso sus conocimientos contables, tributarios, comerciales y de administración, obtenidos empíricamente al servicio del Sr. MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO, en calidad de persona natural desde el año 1978 hasta el 2020, realizando funciones como elaboración y presentación de declaraciones de renta, declaraciones de IVA, de industria y comercio, registros mercantiles ante cámara de comercio, elaboración contable en libros registrados de Mario Correa Arango, registro detallado de movimiento diario de ingresos de manera cronológica, elaboración de contabilidad en libros, de contratos de arrendamiento, permuta, ventas, compras, dirección y administración de la construcción de un hotel o centro comercial en la pintada, realización de la totalidad de gestiones ante la DIAN, industria y comercio, elaboración y presentación de activos en el exterior del señor Mario Correa.

Dice que nunca existió contrato de trabajo ni de otra índole que hubiese sido suscrito entre él y el Sr. MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO, omisión que persistió incluso aún después de haber sido creada la sociedad REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C.

También afirma que a partir del año 1998 y hasta el año 2020, realizó de manera simultánea en calidad de contador empírico de la persona jurídica REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C, labores a favor de los socios comanditarios de la compañía, JONATHAN CORREA MARTÍNEZ, CHARLIE CORREA MARTÍNEZ y WENDY CORREA MARTÍNEZ, quienes además ostentan el primer grado de consanguinidad descendente con el Sr. MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO, socio gestor principal de la citada sociedad comercial.

Refiere, que realizaba sus labores de forma diaria y constante, dada la imprescindible necesidad de registrar los gastos e ingresos diarios y demás movimientos contables requeridos por dicha sociedad, siendo tales funciones realizadas por él exclusivamente, puesto que dicha sociedad prescindía de un auxiliar contable que apoyara dichas labores, las cuales eran necesarias debido al alto número de movimientos contables, aunado a lo anterior, dice que también apoyó

en varios proyectos de construcción al Sr. MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO y su compañera LUZ GABRIELA MARTÍNEZ GIL con visitas presenciales a diferentes municipios, realizadas en su propio vehículo, en aras de administrar, supervisar, brindar acompañamiento o apoyar la compra de materiales y revisión de eventuales necesidades de la obra.

Aduce que además tenía reuniones de negocios con clientes de suma relevancia para la compañía, en aras de debatir, plantear y formalizar negocios de gran importancia, dado su especial conocimiento, habilidades de negociación y apoyo en diferentes asuntos, manifestando a su vez que dichas reuniones por lo general eran realizadas 6 veces al año, en las cuales siempre estuvo presente a efectos de realizar las respectivas actas.

Dice que la última remuneración mensual fue de \$1.500.000, los cuales le eran cancelados por cuatrimestres vencidos y dentro de ese valor se incluía todo requerimiento no cotidiano solicitado por el Sr. MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO en virtud de la subordinación e instrucción ejercida, tal como la elaboración de declaraciones de renta a los familiares del mismo y a los socios que ha tenido históricamente la sociedad y demás gestiones requeridas que fueran esporádicas o no constantes, pero solicitadas por el referido jefe.

Afirma que, para el mes de abril de 2020, le fue comunicada la decisión unilateral de terminación del vínculo laboral con la citada sociedad y que mediante correo electrónico del 25 de junio de 2020, le remitieron “carta aclaratoria”, mediante la cual se pretendió brindar explicación a lo establecido en la acta o convenio de terminación de prestación de servicios, en la que se hizo alusión a precisar que la terminación fue por mutuo acuerdo.

Manifiesta, que en la actualidad tiene 78 años de edad y diversas afectaciones a su salud, estando desprotegido económicamente en virtud de no recibir prestación económica de pensión de vejez, por motivo de la evidente omisión en cuanto a la afiliación y consecuente ausencia de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, durante el término que prestó sus servicios.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia despachó de manera desfavorable los pedimentos de la demanda, absolviendo a los accionados de la totalidad de las pretensiones instauradas en su contra.

El *a quo* fundó su decisión, en que si bien en este caso no se discutía la prestación personal del servicio, ya que fue un asunto aceptado por las partes, de manera que se presumía que el vínculo contractual entre las partes fue de naturaleza laboral, con la prueba aportada por el mismo demandante y el interrogatorio de este, quedó desvirtuada tal presunción, pues el elemento determinandte que es la subordinación no quedó acreditada, ya que éste podía ejercer de manera autónoma sus labores en su casa y no había acatamiento de ordenes o instrucciones, ajustándose el vínculo entre las partes a uno de carácter civil.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La apoderada del demandante apela la decisión de primera instancia, argumentando que el despacho desconoció las disposiciones contempladas en el CST relativas a los elementos esenciales del contrato de trabajo, pues considera que se probó suficientemente la prestación personal del servicio desde 1987 hasta el 2020, siendo un periodo más que suficiente para la prestación de un supuesto contrato de prestación de servicios. Así mismo, dice que se probó suficientemente el tema de la remuneración que era de 6 millones de pesos cada 4 meses, ello aunado a que quedó probado el elemento contundente de toda relación de trabajo, cual es la subordinación, pues quedó establecido que el demandante tenía que estar en continua comunicación con la secretaria de la empresa, tenía que asistir a la oficina a reclamar la documentación requerida para poder hacer los movimientos contables, máxime que la sociedad no contaba con un auxiliar o software contable, es decir, que todo el trabajo lo tuvo que hacer el actor en su propia casa.

Dice que en este caso también quedó probado que el demandante iba a la oficina desde las 7:30 a 9:00 de la mañana, siendo la demandada una compañía de pocos trabajadores, pues solo laboraban allí la secretaria, el mensajero, una persona del aseo y el demandante, es decir, pocas personas para una sociedad que manejaba temas de ganadería, compra y venta de maquinaria y repuestos automotriz, por lo que tenía un alto flujo de caja y por ende tenía la necesidad intrínseca de disponer de

un auxiliar contable, que tuviera la disponibilidad y el consejo que siempre requería el señor MARIO para hacer sus negocios.

También refiere que el demandante debía estar de manera presencial en los proyectos realizados por la sociedad, ya fuera para llevar material o trabajadores a la obra.

De otro lado, dice que se debe tener en cuenta el hecho que al accionante en ningún momento le exigieron los comprobantes de pago de aportes al sistema general de seguridad social, siendo esta una obligación tributaria de la demandada.

Reitera, que el juzgado de instancia desconoció las pruebas documentales, pues las mismas dan cuenta que de los correos electrónicos que envió una de las hijas del demandado en el año 2020, en la cual envió un paz y salvo y la carta de terminación de mutuo acuerdo del convenio, y el documento posterior de aclaración el cual no da cuenta que la terminación fue por mutuo acuerdo.

Aduce que se debe tener presente los múltiples préstamos que se le hacían al demandante que demuestran el nivel de confianza que a éste le tenían.

Indica, que si bien en este caso se alega por la demandada que se trató de un contrato de prestación de servicios, ello tampoco fue estipulado por escrito, es decir, que no se establecieron los límites y funciones que tenía que cumplir el demandante.

También solicita se tenga como indicio grave en contra del señor MARIO, el hecho que a la testigo LUZ ALBA, tenía pensión gracias a que había demandado en otro proceso al señor MARIO quien fue su empleador y a través del mismo, logró conseguir la pensión ya que éste no le pagaba la seguridad social, es decir, que ello demuestra la costumbre que tenía el señor MARIO de no pagar aportes a seguridad social.

Finaliza indicando que pese a que en este caso quedaron acreditados todos los elementos del contrato de trabajo, ello aunado a la presunción legal contenido en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo, quedaba a cargo de la parte demandada demostrar que si existió una prestación de servicios, es decir, demostrando que tenía en la empresa auxiliar contable, lo que no hicieron pues ni siquiera llevaron prueba testimonial, por lo que hay ausencia de elementos probatorios que desvirtuaran la

continua subordinación, dado que el demandante siempre tenía que estar disponible para el demandado.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, las apoderadas judiciales de las partes presentaron alegatos de conclusión, los cuales se transcriben en los siguientes términos:

ALEGATOS DE LOS DEMANDADOS.

“En el proceso de primera instancia no se logró acreditar el contrato de trabajo laboral, y sus requisitos esenciales que son: prestación personal, subordinación y remuneración por parte del demandante, toda vez que entre el señor German y el señor Mario existió un contrato de prestación de servicios que se rigió por la normativa civil y no por la laboral, en donde el demandante no tenía función permanente en el cargo y su contratación era de manera excepcional, y no periódica, esto para desarrollar una determinada labor o prestación de servicios; así mismo, el demandante prestó sus servicios de manera independiente y autónoma para ejecutar su labor, en donde él presentaba sus informes de resultados, sin que ello significará un elemento de subordinación en el contrato; esto significa que el contratista disponía de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, sin estar sometida a la voluntad del contratante, lo anterior se logró acreditar con prueba documental aportada en la contestación de la demanda, en los folios números 55 al 67; en donde se evidencia que el señor German daba órdenes directas a las señoras Erika Zea y Sol Beatriz, toda vez que, el demandante no era contador titulado, sino empírico, y él contaba con su propio personal para la realización de las labores del servicio encomendado por mi poderdante, sin que ellas tuvieran relación alguna con el hoy demandado; y en consecuencia no se logró acreditar la prestación personal del servicio por parte del demandante.

Así mismo, la parte demandante aportó a la demanda en los folios números 24 al 30, la terminación del contrato de prestación de servicios, en donde se evidencia que la terminación del vínculo contractual se originó debido a las fallas técnicas de la prestación de servicio, fallas que significaron serios perjuicios para la organización y

que solo fueron descubiertas con el pasar del tiempo, con ello se quiere decir, que el señor Mario no tenía el conocimiento técnico, ni empírico que le permitiera controlar, subordinar, o dirigir las labores del demandante, por tratarse de conocimientos especializados que el señor German adquirió de manera empírica, que le garantizaban o permitían obrar libre de cualquier subordinación.

Para el caso en concreto, el señor German ejercía funciones de contador, al servicio de la empresa, pues él no requería cumplir un horario todos días, ni debía permanecer en la empresa en una determinada jornada, como se acredita en el folio número 68 de la contestación de la demanda, con el registro de personas autorizadas al Edificio Colmena; y a lo único que tenía derecho el contratista era al pago de sus honorarios, más lo que se haya acordado en el respectivo convenio, como se logró acreditar en los folios números 69 al 87 de la contestación de la demanda por concepto de pagos de honorarios por servicios contables, que eran pagados de manera cuatrimestral y según el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo señala que el período de pago para los sueldos no puede ser mayor a un mes, de manera que unos honorarios cuatrimestral no representan un sueldo o salario que pruebe un supuesto contrato realidad de trabajo

Así mismo, se aportó como prueba documental certificados de paz y salvo, en donde consta que mi poderdante se encontraba a paz y salvo por los servicios contables, en los folios números 41, 44, 45 suscritos por el demandante; así mismo, la parte actora aportó en el folio número 30 el paz y salvo de honorarios.

También, por no existir una relación laboral, no fue exigible, ni reconocible el pago de las prestaciones sociales, ni el pago de la seguridad social, ni el pago de la indemnización por despido sin justa causa al contratista, ya que esas acreencias laborales, le son propias al derecho laboral; y, como en el caso en concreto estamos hablando de un contrato civil, no se contempló una renovación de un contrato de prestación de servicios, por lo que no se aplicó los preavisos, y en cualquier momento se podía dar por terminada la contratación.

Respecto a los pagos de seguridad social, nunca existió un deber por parte del señor Mario que lo obligara a afiliarlo y realizar aportes de seguridad social en favor del señor Vélez Uribe, y el deber de exigirle acreditación de sus propios aportes a seguridad social como independiente, es sabido que dicha observación debe hacerse por parte de la persona encargada de la contabilidad dentro de la cual se incluye la

nómina, es decir, por el demandante, por lo que si hoy el demandante carece de afiliación o aporte a seguridad social es producto de su propia omisión de realizar los respectivos aportes que como independiente debió realizar en su momento y dicha responsabilidad o culpa no puede ser trasladada sin ningún fundamento hacia el señor Mario, pues él no está en el deber de soportar esas cargas que siempre han sido de él, ni puede señalársele como en efecto lo hace, cuando su perjuicio tiene origen en la culpa de la propia víctima. Hoy el demandante se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en salud como beneficiario, tal y como se aportó en el folio número 98, y se desconoce si actualmente está afiliado a un fondo de pensiones, pues dicha información es confidencial y no tengo acceso a ella, de manera tal su señoría que si existe alguna merma o violación de un derecho fundamental como lo es la seguridad social, entre otros dicha violación la causó el mismo demandante y con su omisión faltó al principio de solidaridad que rige la seguridad social en Colombia, pues como independiente debió aportar al sistema y nunca lo hizo.

También, el Juez de primera instancia no le dio plena credibilidad a la declaración de la señora LUZ ALBA NOREÑA MUÑETON, en calidad de secretaria de mi poderdante; toda vez que, ella no le constaba las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la relación contractual entre el demandante y el demandado; y en consecuencia, no logró acreditar los elementos esenciales del contrato de trabajo.

En conclusión, no existe ninguno de los tres elementos fundamentales para la existencia del contrato de trabajo que el accionante por medio de su apoderada quiere hacer ver, muestra de ello, es que no aporta prueba de ningún tipo que soporte tales condiciones de subordinación, prestación personal del servicio y su salario, más que lo mencionado en el escrito de demanda, de manera que nunca existió el vínculo empleador y trabajador.

Por todo lo anterior, le solicito respetuosamente al Juez de Segunda Instancia que confirme la decisión de primera instancia, ya que la parte demandante no logró acreditar la relación laboral objeto del proceso.”

ALEGATOS DEL DEMANDANTE.

“Sea lo primero manifestar que de conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume que toda relación de trabajo personal está regida

por un contrato de trabajo. Dicho de otra forma, en palabras de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL 3126 de 2021 (M.P. Iván Mauricio Lenes Gómez): *“para configurar la existencia de un contrato de trabajo no es indispensable la demostración plena de los tres elementos denominados esenciales en el referido artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Pensarlo así haría nugatoria la presunción legal del artículo 24 ibidem, conforme a la cual basta la demostración efectiva de la prestación personal del servicio para que el contrato de trabajo se presuma, sin que se requiera prueba apta de la subordinación pues una vez aquella opera le corresponde a la contraparte desvirtuarla.”*

Para el presente caso, a lo largo del debate probatorio dado a través de las pruebas documentales, testimoniales e interrogatorios de parte, mi poderdante acreditó que durante más de 40 años prestó sus servicios de forma personal para los demandados pues se encargaba de todos los servicios contables que estos requirieran, pues no existía ninguna otra persona que se encargara de tales labores, como lo sería un auxiliar contable; ni tan siquiera se contaba con un software que se encargará de ello, por ello quedó más que demostrada que mi poderdante era el único responsable de atender tales requerimientos.

Así mismo, a través de las diferentes pruebas, se estableció que el demandante no solo se encargó de prestar dichos servicios, sino que también era el responsable de relacionarse con los clientes y de examinar la documentación requerida para los servicios requeridos por estos y celebrar los negocios jurídicos propios de las actividades ejercidas por los demandados, cuestiones que hacían parte esencial del objeto social de estos. Lo anterior da cuenta además de la relevancia que tenían las funciones desempeñadas por mi poderdante para los demandados, siendo una parte esencial para el desarrollo de los negocios de estos, cuestión que prueba además la existencia de una subordinación.

Aunado a la anterior, es preciso aclarar que no le asiste razón al juzgador de primera instancia al desestimar el testimonio de la señora LUZ ALBA NOREÑA MUÑETON por el simple hecho de haber tenido un proceso judicial en contra de los demandados. Tal cuestión, por el contrario, es óbice para demostrar que para REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C y el señor MARIO JAIRO LEON CORREA ARANGO es una práctica común el no celebrar contratos de trabajo con las personas que les prestan servicios, para así evadir sus responsabilidades como empleadores, como ocurre en el presente caso respecto de

mi poderdante. De igual forma dicho testimonio dio cuenta de la presencia de los demás elementos constitutivos del contrato de trabajo como lo son la remuneración y la subordinación, pues la señora LUZ ALBA indicó la forma en que se realizaban los pagos a mi poderdante, el monto y la periodicidad con que se hacían, cuestiones que son acordes con el concepto de salario contenido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y que también se encontraron probadas en la prueba documental incluida en el expediente. Así mismo la testigo indicada se refirió al demandante como un trabajador más de los demandados, sin que en ningún momento se refiriera a él como un prestador de servicios o como un contratista independiente externo a la estructura organizacional de los demandados, cuestión que permite evidenciar el reconocimiento implícito de la existencia de un contrato de trabajo.

Ahora bien, la parte demandada pretende hacer entender que el hecho de que el demandante no estuviera de forma presencial todos los días en las oficinas de los demandados y el hecho de que tampoco cumplía un horario, son cuestiones que desvirtúan la presunción de subordinación de su parte para mi representada. No obstante, la misma Corte Constitucional en su amplio recorrido jurisprudencial sobre la presunción de existencia de un contrato de trabajo ha indicado que *“Sobre la subordinación, la Corte ha establecido que esta implica que el empleador está facultado para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes en cualquier momento. Estas órdenes pueden estar relacionadas con el tiempo, el modo o la cantidad de trabajo, así como con la imposición de reglamentos para la ejecución de sus tareas. Así mismo, estas órdenes deben ser permanentes durante toda la ejecución del contrato. En ese sentido, la subordinación, como elemento determinante del contrato de trabajo, ha sido entendida por esta corporación como:*

“Un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias (...). (...).” (Sentencia T-329 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo).

Otro aspecto importante a resaltar en el presente caso es lo prologando de la relación sostenida entre mi poderdante y los demandados, la cual se estableció claramente dentro del proceso y se sostuvo desde el año 1987 hasta el año 2020, tal y como lo dio cuenta el interrogatorio del señor Mario Correa y de mi poderdante. Es

decir los extremos de la relación se encontraron debidamente probados. Al respecto resulta procedente traer a colación la sentencia T-388 de 2020 (M.P. Diana Fajardo Rivera) en la cual el Alto Tribunal Constitucional indicó que: *“el contrato de prestación de servicios se desnaturaliza cuando no se cumple con el objetivo de que tenga un límite temporal definitivo, sino que se prolonga por varios años, contrariando así las mencionadas normas que indican que el contrato se debe desarrollar por el término estrictamente necesario o, en su defecto, crearse los empleos que suplan la necesidad permanente del cargo.*

Ejemplo de lo expuesto se encuentra, entre otros, en la Sentencia T-345 de 2015 cuyo caso consistió en la existencia de una relación desarrollada por más de 20 años mediante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios, ante lo cual se concluyó que se incumplió con el requisito de temporalidad que se exige en esta clase de contratos y, por tanto, se dio prevalencia al principio de realidad sobre las formas. Al respecto, se argumentó que la duración de un contrato de prestación de servicios debe ser por tiempo limitado y, en el caso de que las actividades demanden una permanencia mayor e indefinida, la respectiva entidad debe adoptar las medidas pertinentes para proveer su planta de personal. Por tanto, es claro que el exceso del carácter excepcional y temporal de un contrato de prestación de servicios genera que este, en la realidad, se convierta en un contrato ordinario y permanente.” Para el caso que atañe al presente proceso, de conformidad con la jurisprudencia expuesta en las líneas precedentes, lo prologado de la relación sostenida entre las partes es prueba fehaciente de que esta se rigió por un contrato de trabajo y no por un contrato de prestación de servicios, cuestión que desestimada por el juez de primera instancia y que es causal suficiente para que el Despacho reconsidere la decisión de este.

En conclusión el juez de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas allegadas al proceso y por ende dio por no demostrada, cuando si lo estaba la existencia de un contrato de trabajo entre mi poderdante y los demandados, pues como es explico a lo largo del presente escrito además de haberse probado la prestación personal del servicio por parte de mi representado y lo extremos de la relación laboral, esto último incluso a través de la confesión obtenida a través del interrogatorio de parte del demandado Mario Correa; la contraparte no logró desvirtuar la existencia de los demás elementos constitutivos de un contrato de trabajo como lo son la remuneración y la subordinación.

En conclusión para el caso que atañe el presente pronunciamiento, nos encontramos frente a la presencia de un contrato realidad, el cual fue definido por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL2885 de 2019 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo) como *“aquel que pese a sus contenidos y apariencia, constituye una verdadera relación de trabajo dependiente, de modo que más allá de los documentos o palabras que usen los contratantes para definir el tipo de relación que contraen, lo relevante es el contenido material de esta y los hechos que la determinan.”* Siendo así, entonces resulta también procedente aplicar lo dispuesto en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, pues al no existir un acuerdo por escrito entre las partes que determine la duración de la relación, es necesario concluir que se trata de un contrato a término indefinido.

Por todo lo anterior, me permito solicitarle respetuosamente al despacho que se REVOQUE la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín y en su lugar, se DECLARE la existencia de una relación laboral entre mi representado y los demandados, por ende, se CONDENE a estos al pago de las pretensiones solicitadas en la demanda, derivadas de la declaratoria de existencia de una relación laboral.”

5. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si en el proceso se acreditó que entre el actor y los demandados existió una relación de carácter laboral y si de haber existido, si procede la condena al pago de emolumentos prestacionales laborales solicitados en la demanda. En caso positivo, se analizará si procede la condena solidaria contra el señor MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO en calidad de persona natural.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

El análisis del caso versará sobre lo que es objeto del recurso de apelación atendiendo lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio

de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Sea lo primero señalar que, en cuanto a la carga probatoria, el artículo 167 del CGP dispone que *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”*

Dicho lo anterior se tiene que, en los juicios de trabajo resulta de fundamental importancia establecer la existencia del contrato de trabajo entre las partes, como fuente de la cual devienen los derechos laborales que se reclaman.

En el presente caso, existe controversia entre las partes sobre la existencia del contrato de trabajo, pues mientras la parte demandante afirma que lo hubo entre el 01 de noviembre de 1987 y el 30 de mayo de 2020, la demandada lo niega tajantemente, aduciendo que lo que había entre las partes era un contrato de prestación de servicios.

En cuanto al contrato de trabajo, al tenor de lo previsto en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, este se define como un acto jurídico que se celebra entre una persona natural denominada trabajador y una persona natural o jurídica llamada empleador. Acto jurídico a través del cual el trabajador se compromete con el empleador a la prestación personal de un servicio bajo su continuada subordinación y dependencia, para recibir como contraprestación una remuneración por salarios.

A su vez, el artículo 45 ibídem precisa que el contrato de trabajo puede celebrarse por un tiempo determinado; por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada; por un tiempo indefinido; o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.

Y según los artículos 37 y 38 del mismo código objetivo, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario y cuando se trate de un contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de I). La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse; II). La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago; y III). La duración del contrato.

Conforme el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en el contrato de trabajo concurren la actividad personal del trabajador, el salario como retribución del servicio prestado y la continuada subordinación que faculta al empleador para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, ello sin afectar su honor, dignidad humana y sus derechos mínimos laborales.

Por otra parte, debe señalar la Sala que, en materia laboral en el sector privado, existe conforme al artículo 24 del C.S.T. subrogado por el Art. 2 de la ley 50 de 1990, la presunción que toda prestación personal continua de un servicio, está regida por un contrato de trabajo, pero es esta una presunción de hecho que puede ser desvirtuada mediante la prueba correspondiente.

En atención a la norma mencionada anteriormente, le corresponde al pretendido trabajador, probar la prestación personal del servicio y al demandado probar que el servicio prestado por quien alega haber tenido una relación laboral, o bien no existió, o en su defecto estuvo regido por un contrato u otra situación que no tenía la naturaleza laboral.

Así las cosas, le corresponde al pretendido trabajador, probar la prestación personal del servicio y al demandado probar, que el servicio prestado por quien alega haber tenido una relación laboral, se desarrolló en los términos de un contrato con ausencia de **subordinación** laboral, es decir que en los procesos donde se demanda la declaración de trabajo donde no está en discusión la prestación personal del servicio, se invierte la carga de la prueba, debido a que quien alega haber sido trabajador no le corresponde probar que lo era, sino a la parte demandada probar que no lo era.

La Colegiatura advierte en este sentido, que en los procesos del denominado “contrato realidad”, la prueba fundamental es la testimonial y los interrogatorios de parte para establecer si en el desarrollo de la prestación del servicio se presentó subordinación de tipo laboral, particularmente en lo atinente a la libertad de horario o la imposición del mismo, el deber de cumplir órdenes que le imponga el contratante al contratista y otros elementos que son ajenos al contrato civil de prestación de servicios personales, toda vez que las pruebas documentales poco o nada sirven

para resolver este tipo de litigios, salvo que las mismas contengan manifestaciones de la subordinación.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en sentencia SL3126-2021, en la que señaló lo siguiente:

“Por último, debe destacarse que para configurar la existencia de un contrato de trabajo no es indispensable la demostración plena de los tres elementos denominados esenciales en el referido artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Pensarlo así haría nugatoria la presunción legal del artículo 24 ibidem, conforme a la cual basta la demostración efectiva de la prestación personal del servicio para que el contrato de trabajo se presuma, sin que se requiera prueba apta de la subordinación pues una vez aquella opera le corresponde a la contraparte desvirtuarla.”

De igual forma, es de advertir que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencias del 25 de septiembre de 2003, radicado 20.311 y del 11 de octubre de 2011, radicado 23587, ha precisado que en los contratos civiles o mercantiles, no es extraño a que existan instrucciones, controles y supervisión del contratante sobre el contratista, toda vez que en las relaciones donde hay obligaciones recíprocas, se estipulan deberes que deben ser cumplidos y no necesariamente son órdenes que impliquen subordinación.

Y en sentencia SL 9801 del 29 de julio de 2015, radicado 44519, la Corte precisó que el control y la supervisión que el contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre la ejecución y las obligaciones derivadas de tal relación, en ningún caso es equiparable a los conceptos de subordinación y dependencia propios del contrato de trabajo, pues estas últimas son de naturaleza distinta.

Aunado a lo anterior, la citada Corporación en sentencia SL225 de 2020 señaló:

“Previamente, y sin que ello signifique desconocer la orientación fáctica del cargo, se hace necesario precisar el alcance del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, su aplicación en las profesiones liberales y la carga demostrativa que le asiste al demandante en estos casos, con el fin de dar respuesta a los planteamientos de la censura.

Las profesiones liberales, como la contaduría, son disciplinas reconocidas por el Estado, en ellas predomina el ejercicio del intelecto y para su ejercicio se requiere además de un título académico, una licencia o matrícula profesional. Se les califica como liberales porque en su desempeño media la autonomía técnica, organizativa y profesional. Sus rasgos distintivos son la autodeterminación en el desarrollo de las tareas, la responsabilidad personal atribuible a quienes las ejercen y el código ético

profesional que guía su ejercicio.”

Por otro lado, la Corte Constitucional en la sentencia C – 665 de 1998, que definió la inexequibilidad del inciso 2.º del artículo 2.º de la Ley 50 de 1990, por el cual se modificó el artículo 24 del C.S.T. que exceptuaba de la presunción a quienes presten servicios personales en ejercicio de una profesión liberal y a quienes lo hagan en desarrollo de un contrato civil o comercial señaló:

“Como ya se advirtió, la Carta Política establece en cabeza de todos los trabajadores, sin discriminación alguna, una especial protección del Estado, y les garantiza el ejercicio pleno y efectivo de un trabajo en condiciones dignas y justas, así como un trato igual. Por lo tanto, cuando a un reducido sector de trabajadores que prestan sus servicios personales remunerados en forma habitual, en desarrollo de un contrato civil o comercial, y pretenden alegar la subordinación jurídica, al trasladársele la carga de la prueba de la subordinación, se produce ciertamente, dentro del criterio de la prevalencia de la realidad sobre la forma, una discriminación en relación con el resto de los trabajadores, colocando a aquellos, en una situación más desfavorable frente al empleador, no obstante que la Constitución exige para todos un trato igual (artículo 13 CP.).

Cabe advertir que conforme lo establece el artículo 53 de la Carta Fundamental, el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral, implica como lo ha sostenido esta Corporación, un reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, así como a la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin que puedan verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades.

Y si la realidad demuestra que quien ejerce una profesión liberal o desarrolla un contrato aparentemente civil o comercial, lo hace bajo el sometimiento de una subordinación o dependencia con respecto a la persona natural o jurídica hacia la cual se presta el servicio, se configura la existencia de una evidente relación laboral, resultando por consiguiente inequitativo y discriminatorio que quien ante dicha situación ostente la calidad de trabajador, tenga que ser este quien deba demostrar la subordinación jurídica.

Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al empresario.

El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción.

Esto, desde luego, no significa que desaparezcan las posibilidades de contratos civiles o comerciales, o con profesionales liberales, desde luego, mientras no constituyan apenas una fórmula usada por quien en realidad es patrono y no contratante para burlar los derechos reconocidos en la Constitución y la ley a los trabajadores.”

Así las cosas, conforme la jurisprudencia atrás citada, la presunción del contrato de trabajo cobija incluso el ejercicio de las profesiones liberales, correspondiendo en cada caso al juez, establecer si el contrato se desarrolla bajo la continuada subordinación y dependencia del contratista, siempre que así derive de las circunstancias de ejecución; por tanto, corresponde al contratante desvirtuar la presunción legal y demostrar que los servicios se prestaron con la autonomía e independencia propias del esquema civil o comercial.

En el presente caso, conforme la respuesta a la demanda, la empresa demandada no niega la prestación personal del servicio del demandante, realizando labores de contaduría tanto para la empresa, como para los socios de la misma, pero aduce que esta vinculación se hizo mediante un contrato de prestación de servicios personales, debiéndose en consecuencia valorar las declaraciones de la testigo y los interrogatorios de parte, a efecto de establecer los parámetros bajo los que se desarrolló la prestación personal del servicio por el actor y definir si la demandada logró derruir la presunción que pesa en su contra de existencia de un contrato de trabajo.

Pues bien, en el interrogatorio de parte rendido por el demandado **MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO**, el cual se encuentra grabado en el audio de la Audiencia de Trámite y Juzgamiento que reposa en el archivo N° 25 del expediente digital, este manifestó haber tenido vínculos comerciales con el demandante desde 1987. Afirmó que el señor LUIS GERMÁN se encargaba de la contabilidad de la empresa y de los socios y que no cumplía otras funciones distintas a las contables. Dijo que el accionante esporádicamente se le encomendaban reuniones con los clientes de la empresa relacionadas con la contabilidad de la empresa. Que no tenía plazo para hacer sus tareas, que él simplemente iba a la empresa a recoger la papelería y se la llevaba a su casa para hacerla. Dijo que como retribución al servicio prestado recibía 6 millones cada 4 meses y que nunca se enteró de problemas de salud que pudiera tener el demandante. Dice que el demandante no tenía oficina o escritorio en la empresa, solo iba a recoger papeles y que los mismos eran entregados por la secretaria. También refiere que como el demandante no era contador, el revisor fiscal

de la empresa revisaba la documentación que LUIS GERMÁN le pasaba o los documentos los hacía firmar por una contadora que él tenía como amiga, de la cual no recuerda el nombre porque tampoco la conoció.

Por su parte, el demandante **LUIS GERMÁN VÉLEZ URIBE**, también rindió declaración afirmando que desde el año 1978 le realiza las declaraciones de renta al señor MARIO CORREA, además de la declaración de activos en el exterior. También refiere que le hacía las declaraciones de renta e iva, relación de retenciones en la fuente, auto retenciones de declaración de renta y balances en la empresa y que para eso la señora MARÍA ROCÍO SEPÚLVEDA lo amparaba con la firma de profesional en contaduría y por eso le pagaba, ya que él era contador empírico. Dijo que iba a la oficina a recoger documentos como comprobantes de costos, gastos, deducciones, exentos y hacia relación general para efectos de balance y se los llevaba para trabajar en su oficina porque la empresa no tenía software contable. Afirma que no tenía horario porque la oficina la abrían a las 7 de la mañana y cerraban a las 12 del día, entonces iba regularmente a las 7:30 de la mañana y se quedaba hasta las 10 de la mañana recogiendo documentos del señor MARIO, de su esposa y la sociedad, y luego se llevaba el paquete para su casa. También dice que las herramientas de trabajo se las proporcionaba por sí mismo. Dice que el señor MARIO lo llamaba 4 o 5 veces diarias durante más de 20 años a pedirle concepto por ejemplo, sobre como comprar un ganado y a nombre de quien debía poner la factura. Que también por medio de la secretaria le solicitaban información o le suministraban documentos, es decir, que estaba a disposición del accionado todo el tiempo. Dice que devengaba \$1'500.000 pesos mensuales y se los pagaban por cuatrimestres vencidos. Afirma que los reportes de llegada y salida se los hacía la secretaria LUZ ALBA NOREÑA. Que no le prestaba servicios contables a otra empresa, aunque ocasionalmente le hizo declaraciones a los amigos del demandado. También refiere que el accionante que siempre le hizo todas las declaraciones de renta a su propia familia. Desconoce la razón por la cual el señor MARIO prescindió de sus servicios y dijo que durante todo el tiempo que trabajaron juntos, la empresa nunca tuvo una multa de impuestos. Dice que en los últimos años quien le firmaba las declaraciones de la empresa era el revisor fiscal. Que nunca le mostró la historia clínica al señor MARIO, ni le contó las afecciones que tenía en su salud. Dice que nunca solicitaba permiso para ausentarse de su lugar de trabajo, que por ejemplo cuando tenía que ir a mercar o debía salir, no pedía permiso, que también sacaba vacaciones a final de año y se iba con su familia de paseo durante ocho días y no le informaba a nadie.

Finalmente, rindió testimonio la señora **LUZ ALBA NOREÑA MUÑETÓN**, quien afirmó haber trabajado en la empresa REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C durante 26 años. Dijo que se vio obligada a renunciar, que tuvo que demandar la empresa y ganó el proceso y gracias a ello se pudo pensionar. Dice que empezó como secretaria, posteriormente fue administradora y luego asistente de gerencia. Afirma que el señor GERMAN VÉLEZ hacía todas las funciones relacionadas para el funcionamiento de la empresa, lo que implicaba muchísima contabilidad porque la empresa se dedicaba a muchas cosas. Refiere que el demandante se encargaba de la documentación y papelería de impuestos, retenciones de iva, las declaraciones de renta de todos los socios, que él nunca tuvo auxiliar y constantemente estaban en reuniones en la empresa o en el apartamento del señor MARIO. Dice que el señor GERMAN no tenía que cumplir horario, aunque iba todos los días a la oficina y tenía que estar pendiente para cuando MARIO lo requiriera. Que iba por los papeles y se los llevaba para su casa porque en la oficina no tenía espacio para hacerlo, pero cuando había cosas que hacer, estaba en la oficina. Dice la declarante que ella siempre tuvo que cumplir horario y que el demandante podía estar en la oficina entre 3 y 5 horas, que eso dependía de lo que había que hacer. Dice que el jefe de GERMÁN era MARIO, que era el que daba las órdenes relacionadas con la empresa, que no recuerda alguna instrucción que le diera a GERMAN porque él era muy bueno en su trabajo, que a veces le decía que hiciera alguna cosa de determinada manera. Dice que la empresa es muy grande, tiene mensajero, una persona del aseo y ella como secretaria que estuvo hasta el año 2016, que además el señor GERMAN hacía todas las funciones contables de la empresa. También afirma que el señor GERMAN no tenía plazo para hacer el trabajo, ya que siempre estaba dispuesto a hacerlo en cualquier horario o en el lugar que fuera. Dice que se imagina que los socios le daban órdenes a GERMAN, por instrucciones del señor MARIO. También dice que cuando el señor GERMAN iba a la oficina, ellos compartían escritorio. Dice que GERMAN nunca solicitó permisos o licencias, que él no tenía llaves de la oficina, que a veces GERMÁN solicitaba pagos adelantados y el señor MARIO los autorizaba. Dice desconocer como hacía el demandante la contabilidad porque todo lo hacía en su casa y afirma que a la oficina iba a recoger documentación para poderse ir a hacer el trabajo en la casa.

Valorada la comunidad de la prueba, la Sala encuentra que con ella, se desvirtúa la presunción de la existencia del contrato de trabajo, pues nótese como aunque la testigo LUZ ALBA NOREÑA MUÑETÓN manifestó que el jefe del señor GERMAN

era el señor MARIO, quien funge como representante legal de la empresa demandada, lo cierto es que la declarante no supo explicar en qué consistían las órdenes que le daba el señor MARIO o que instrucciones debía seguir el señor GERMAN.

Resalta la Sala, que la testigo dijera que el demandante no tenía horario y que no tenía que pedirle permiso a nadie para ausentarse, que no tenía plazo para entregar los informes, de manera que se desvirtúa la subordinación, pues el control, distribución de labores o la supervisión que el contratante de un convenio comercial o civil realice sobre la ejecución y las obligaciones derivadas de tal relación, en ningún caso es equiparable a esa dependencia propia del contrato de trabajo, máxime cuando de lo dicho por el actor en el interrogatorio de parte, se extraen las mismas afirmaciones a las que llega la testigo, cuando éste afirma que no tenía horario, que solo iba a la empresa a recoger documentos para realizar la contabilidad, que trabajaba en su propia casa, que las herramientas de trabajo se las proporcionaba él mismo, que las llamadas aunque constantes que recibía del señor MARIO era para pedirle asesoría relacionada con la contabilidad de la empresa, que él se encargaba de pagarle a una contadora para que prestara su firma, que nunca solicitó permiso para ausentarse de su lugar de trabajo y que podía sacar vacaciones sin tener que contar con nadie, lo que demuestra que podía realzar las labores encomendadas por cuenta propia, evidenciándose que contaba con autonomía para desarrollar la labor, lo que supone un contrato distinto del laboral, que tampoco implicaba la imposición de un horario.

En tales condiciones es claro que ningún poder de subordinación ejercía la empresa demandada REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C o el señor MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO ante la autonomía que tenía el demandante para realizar su labor, ello sumado a que ni la testigo, ni el demandante, refirieran una sola orden que le pudo haber dado el señor MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO, ya sea como persona natural o como representante legal de la empresa demandada, fuera de las directrices de coordinación para la labor contratada, situación que no desdibuja un contrato de carácter civil o comercial.

En suma, aunque las partes no aportaron el contrato de prestación de servicios que los unió, lo cierto es que las demás pruebas practicadas desvirtúan la presunción de existencia del elemento subordinación, pues se logra establecer que el actor estaba

facultado para ejercer de manera autónoma su labor y desarrollarla en el horario y tiempo que definiera, ello aunado a que si bien al proceso si fueron allegados los comprobantes de pago efectuados al demandante, de los mismos no es factible inferir algo distinto, en cuanto son el reflejo de la formalidad que pactaron las partes, sin que ello desnaturalice el vínculo contractual subyacente, pues en realidad se constata en las circunstancias de ejecución de la labor, se dieron con la autonomía e independencia propia de los contratos de prestación de servicios.

En cuanto a la alegación de la recurrente referente a que fue por un espacio de tiempo demasiado largo que se desarrolló el contrato de prestación de servicios, cuando el mismo debe ser temporal, debe decirse que el hecho de que el actor y la empresa REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C hayan sostenido una relación contractual duradera, no conlleva a considerar la existencia de un contrato de trabajo, pues para que este se produzca debe verificarse la existencia de los elementos que le son propios. Es claro que en otro tipo de vínculos pueden verificarse la presencia de dos de los elementos de este tipo de contratos, como lo son la prestación personal del servicio y la retribución del mismo y pueden perdurar por años sin que por ello se conviertan en relaciones de carácter laboral, siempre y cuando no se presente ese elemento que los diferencia, como lo es la **subordinación**, como ocurre en este caso en el que se desvirtuó su presencia. Aunado a lo anterior, debe decirse que tampoco es de recibo lo alegado por la parte actora, en cuanto solicita tener como indicio grave en contra del demandado, el hecho que la testigo LUZ ALBA NOREÑA MUÑETON hubiera tenido que demandar en otro proceso judicial al señor MARIO y su empresa, en busca de los emolumentos laborales y prestacionales, así como la pensión de vejez, ya que se trata de un tema que es propio de otro litigio y que no puede ser usado como argumento en este proceso, pues las circunstancias en cada caso debe ser analizadas al detalle por el juez, tal y como ocurre en este caso, en el que se desvirtúa la presunción del contrato laboral, no solo con la prueba testimonial, sino con el propio interrogatorio de parte, prueba que fue solicitada por la parte accionada para provocar confesión.

Finalmente, respecto de las aseveraciones que se realizan en la apelación en lo concerniente a que se debe tener en cuenta el hecho que al accionante en ningún momento le exigieron los comprobantes de pago de aportes al sistema general de seguridad social, siendo esta una obligación tributaria de la demandada, es preciso manifestar que confirme las previsiones de los Arts. 3.2.7.2. y siguientes del Decreto

1273 de 2018, aun teniendo el actor la calidad de contratista por prestación de servicios, al menos desde el mes de septiembre de 2018, el contratante, estaba obligado a efectuar la retención y giro de los aportes al Sistema de Seguridad Social, y si no lo hizo, será responsable de girar a las administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral las sumas dejadas de retener o retenidas por valor inferior al que corresponde, y por los intereses moratorios que se causen debido a la inobservancia de los plazos establecidos para el giro de los aportes retenidos.

Las normas legales antes citadas son del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 3.2.7.2. Retención de aportes. Los contratantes públicos, privados o mixtos que sean personas jurídicas, los patrimonios autónomos y consorcios o uniones temporales conformados por al menos una persona jurídica deberán efectuar la retención y giro de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral a través de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante, en los plazos establecidos en el artículo 3.2.2.1 del presente decreto, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT del contratante.

PARÁGRAFO 1. La suma a retener será la que resulte de aplicar al Ingreso Base de Cotización (IBC) definido en el artículo 3.2.7.1 del presente decreto y los porcentajes establecidos en las normas vigentes para salud, pensiones y riesgos laborales, o las que las modifiquen o sustituyan.

PARÁGRAFO 2. En aquellos casos en que el contratista cotice por varios ingresos, la retención y pago de aportes se efectuará sobre el valor resultante en cada uno de los contratos, independientemente de que el resultado de la aplicación del 40% al valor mensualizado del contrato o contratos sujetos a retención sea inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

ARTÍCULO . 3.2.7.3. Reporte de novedades. El contratante que realice la retención y giro de los aportes deberá reportar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) las novedades de inicio, suspensión y terminación del contrato.

ARTÍCULO . 3.2.7.4. Omisión del deber de retención y giro de los aportes. El contratante será responsable de girar a las administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral las sumas dejadas de retener o retenidas por valor inferior al que corresponde, y por los intereses moratorios que se causen debido a la inobservancia de los plazos establecidos para el giro de los aportes retenidos, sin perjuicio de las sanciones penales, fiscales y/o disciplinarias a que haya lugar.

PARÁGRAFO . Cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados, de conformidad con lo dispuesto para el efecto en el contrato, estará a cargo del contratista el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar; en estos eventos excepcionales, el contratista deberá acreditar al contratante el pago del período correspondiente.

Cuando los pagos realizados por el contratista no correspondan a la totalidad del aporte obligatorio al Sistema de Seguridad Social Integral, el contratante informará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para lo de su competencia.”

En razón a lo anterior se condenará a los demandados a pagar al actor las cotizaciones al sistema pensional a partir el mes de septiembre de 2018 inclusive hasta la terminación del vínculo contractual el que, fue el 30 de mayo de 2020 conforme al documento de folio 24 del archivo 03 del expediente digitalizado.

Respecto del ingreso base de cotización con el que se realizarán los aportes pensionales, será el cuarenta por ciento (40%) de los honorarios mensuales pagados al actor que los demandados confesaron y probaron que fue de \$6.000.000 cancelados cuatrimestralmente, es decir la suma de \$1.500.000 mensuales, conforme los documentos obrantes a folio 75 y siguientes aportada por los demandados. (documento 09 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA)

Así las cosas, se condenará solidariamente a los demandados a pagar al último fondo de pensiones al que haya estado afiliado el actor o al que se afilie, si nunca ha estado afiliado, los aportes al, sistema pensional sobre un ingreso base de cotización del \$600.000 en un porcentaje del dieciséis por ciento (16%) entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de mayo de 2020, con los intereses moratorios que establece el **Artículo 3.2.7.4.** del Decreto 1273 de 2018, liquidados desde el día once (11) hábil siguiente al vencimiento de cada mes a cotizar, pues como quiera que los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía del actor son el 5 y el 8 a folio 23 del documento 03 digitalizado, el pago conforme al Decreto 1990 de 2016 se debía realizar a más tardar el décimo día hábil siguiente al mes de causación del aporte.

El pago se realizará al último fondo de pensiones al que haya estado afiliado el actor o al que se afilie, si nunca ha estado afiliado, lo que deberá ser informado por escrito a los demandados por el demandante, mediante comunicación a la que se le colocará el recibido o se enviará por correo a los demandados a la dirección que se registra en la demanda para notificaciones.

Por las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en pretendencia, se confirmará la decisión de primera instancia que decidió negar las pretensiones de la demanda, salvo en lo referente a los aportes pensionales de los que se producirá la condena en la forma como fue explicado en precedencia.

Conforme a la preceptiva del Nral 5 del art. 365 del CGP que establece: ***“En caso que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar***

en costas o pronunciar condena parcial expresando los fundamentos de su decisión.” No se imponen costas a ninguna de las partes, por cuanto ambas resultaron parcialmente vencidas en sus pretensiones y excepciones.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada del 02 de agosto de 2022 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA, promovido por el señor **LUIS GERMÁN VÉLEZ URIBE** contra el señor **MARIO JAIRO LEÓN CORREA ARANGO** en calidad de persona natural y la sociedad **REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C.**, salvo en lo referente a la negativa a la condena al pago de los aportes al sistema pensional, de los que se **CONDENA** solidariamente a los demandados a pagarlos al actor, sobre un ingreso base de cotización del \$600.000 en un porcentaje del dieciséis por ciento (16%) entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de mayo de 2020, con los intereses moratorios que establece el Artículo 3.2.7.4. del Decreto 1273 de 2018, liquidados desde el día once (11) hábil siguiente al vencimiento de cada mes a cotizar.

El pago se realizará al último fondo de pensiones al que haya estado afiliado el actor o al que se afilie, si nunca ha estado afiliado, lo que deberá ser informado por escrito a los demandados por el demandante, mediante comunicación a la que se le colocará el recibido o se enviará por correo a los demandados a la dirección que se registra en la demanda para notificaciones.

SEGUNDO: SIN COSTAS en estas en ninguna de las instancias.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: LUIS GERMÁN VÉLEZ URIBE
DEMANDADOS: MARIO JAIRO CORREA ARANGO Y REPRESENTACIONES MARIO CORREA ARANGO Y CIA S EN C
RADICADO: 05001-31-05-002-2021-00428-01

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6d1bad3b466b5675d02911b541edb02ed5e4e158409490e8c1499cb27f8e0d2b**

Documento generado en 31/03/2023 02:20:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>